



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTITRÉS (23) PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**

Juez: Luz Angela Corredor Collazos
Radicación: 110014009023202200183
Accionante: Martha Isolina Padilla Ariza
Accionado: Secretaria Distrital De Movilidad
De Bogotá D.C.
Motivo: Acción de tutela 1° instancia
Decisión: Hecho Superado

Bogotá D. C., veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

1. ASUNTO

El Juzgado Veintitrés (23) Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., decide sobre la acción de tutela instaurada por MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA, en nombre propio, en protección de su derecho fundamental de petición, cuya vulneración le atribuye a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. HECHOS

Indicó que el 17 de junio de 2022, radico derecho de petición ante la entidad pública accionada, solicitando el embargo del vehículo automotor con placa HTN 466, conforme lo ordeno el Juzgado 06 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, en el proceso con radicado 47-001-4189-006-2022-00303-00.

Agrega que la entidad demanda le respondió que debía radicar la solicitud en otro correo, lo cual en efecto realizo. Refirió que no obtuvo respuesta de la misma dentro del término previsto por la ley.

En consecuencia, solicita la protección del derecho fundamental invocado, y ordenar remitir respuesta de fondo de la petición impetrada.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

3.1. Mediante auto del 15 de diciembre de 2022, el Despacho avocó el conocimiento de la presente acción constitucional, disponiendo correr traslado de la misma a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C., para que en el término improrrogable de un (1) día contado a partir del recibido de la respectiva notificación, se pronunciaran y allegaran los documentos que consideran pertinentes¹.

Adicionalmente se decretó como prueba de oficio, informar el estado del proceso 47-001-4189-006-2022-00303-00 y allegar las piezas procesales importantes del mismo, al JUZGADO 06 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SANTA MARTA, MAGDALENA.

3.2. El Abogado del CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL, concesionario de la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, informo que el derecho de petición fue radicado el 21 de junio de 2022, ante esa concesión, a través del radicado CyS 7S00497037.

¹ Ver archivo 004 en cuaderno digital.



Indicio que, dicho derecho de petición fue respondido mediante el Oficio 3.1.2.6276.22 de 12 de julio de 2022, sin embargo, en la misma fecha, cometieron un error al momento de digitar el correo de la actora, por lo que el correo se remitió de manera errada; siendo esta situación subsanada 19 de diciembre de 2022, al remitir el oficio al correo de la accionante, allegando la respectiva constancia:

RE: CyS 7S00497037 de 21 de junio de 2022 Vehículo de placa HTN466

Derechos Petición <derechos.petición@ventanillamovilidad.com.co>

Lun 19/12/2022 14:23

Para: notif.procesos.jud@gmail.com <notif.procesos.jud@gmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (217 KB)

HTN466.pdf;

Buen día.

Reciba un cordial saludo de la Ventanilla única de servicios-VUS, concesionario de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para la prestación de los servicios administrativos de los Registros Distritales Automotor y no automotor, de Conductores, de Tarjetas de Operación y demás registros de tránsito y transporte.

Por medio de la presente, este Consorcio adjunta el oficio C.J.M.3.1.2.6276.22 mediante el cual se da respuesta a su petición el 12 de julio de 2022, lo anterior, teniendo en cuenta que, por error se remitió al correo electrónico noti.procesos.jud@gmail.com. cuando el correo correcto es notif.procesos.jud@gmail.com

Finalmente informamos que el correo asignado por este Consorcio para la recepción de correspondencia concerniente a órdenes de embargos, desembargos, acciones de tutela, derechos de petición entre otros es: contactenos@ventanillamovilidad.com.co

Cordialmente,



Luisa Fernanda Penagos Gonzalez
Abogada de Derechos de Petición.
Consortio Circulemos Digital.

3.3. El 22 de diciembre de 2022, atendiendo a la respuesta emitida por la empresa accionada, a través de su concesionario, se procedió a contactar telefónicamente a la accionante con el número de celular contenido en la demanda de tutela, siendo atendido la demandante MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA, quien corrobora al Despacho, el recibido de la respuesta del derecho de petición por parte del CONSORCIO CIRCULEMOS DIGITAL, concesionario de la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

De conformidad con las previsiones del artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con los artículos 1º, 37 y 42 del Decreto 2591 de 1991, y el Decreto 306 de 1992, así como con el numeral 1º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1938 de 2017, la suscrita juzgadora es competente para resolver la presente acción de tutela.

4.2. Naturaleza de la acción de tutela

El ámbito conceptual que enmarca el campo de aplicación de la acción de tutela, está dado tanto en la consagración que de ella hace nuestra Constitución Política en el artículo 86, como su desarrollo normativo en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 que lo reglamentan. En efecto, de esa normatividad surge esa figura jurídica, que puede definirse como una institución especial cuya finalidad es



proteger los derechos y libertades fundamentales de la persona, mediante un procedimiento judicial preferente y sumario, cuando aquellos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares.

4.3. Problema jurídico a resolver

Se trata de establecer a la luz de los preceptos legales y constitucionales, si la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, vulnero o amenaza con vulnerar el derecho fundamental de petición de MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA.

5. DEL CASO EN CONCRETO

Sea lo primero señalar que conforme lo establece el artículo 86² de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de carácter residual, preferente y sumario, cuyo objeto es la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona que lo solicita directa o indirectamente, con ocasión de la vulneración o amenaza que sobre estos se ha causado por autoridades públicas o excepcionalmente por particulares; siendo un recurso que se encuentra supeditado a los requisitos de legitimidad por activa y pasiva, de inmediatez y subsidiariedad.

Para el caso en conocimiento del Despacho, se acredita la legitimación tanto por pasiva como por activa. En el entendido que, es la señora MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA, quien acude al amparo constitucional en protección de su derecho fundamental, es decir, se cumple con los presupuestos del art. 10 del Decreto 2591 de 1991; al igual que si la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para ser objeto pasivo de la tutela, por cuanto se trata de una entidad incluida en el numeral 1° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017³.

Al respecto, se vislumbra satisfecho el *requisito de inmediatez* por cuanto la acción de tutela se interpuso en un tiempo prudencial, dado que, entre la actuación presuntamente vulneradora del derecho de la señora PADILLA ARIZA, esto es la omisión de responder y notificar el derecho de petición remitido el 17 de junio de 2022, a través de correo electrónico, transcurrieron 5 meses y 27 días al interponer la acción de tutela el 15 de diciembre de los corrientes, superando los 15 días hábiles para contestar el mismo de conformidad con el inciso 1° del artículo 14 de la Ley 1755 del 2015.

Frente al requisito de subsidiariedad, la accionante se encuentra en una situación de subordinación, derivado de la inexistencia de un mecanismo idóneo y efectivo para velar por la protección de su derecho fundamental invocado.

En cuanto al derecho de petición consagrado en el artículo 23 Superior, se reglamentó mediante la Ley 1755 de 2015, en la que se consignaron entre otros los términos en los que se debe plantearla petición y los criterios para que se entienda resuelta.

Así mismo debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a partir de lo dispuesto en la citada Ley, estableció mediante sentencia C-007

² **ARTICULO 86.** Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

³ No. 1° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017



de 2017 el contenido de los tres⁴ elementos que conforman el núcleo esencial del derecho invocado en el presente trámite tutelar, a saber: “i) La pronta resolución, ii) La respuesta de fondo y iii) La notificación de la decisión.

Señalando además que “(...) **se presenta la vulneración de este derecho fundamental cuando se evidencie que no se ha otorgado respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o en aquellos casos en los que, no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o adecuada de acuerdo con la solicitud; sin que esto último signifique que la respuesta implique acceder, necesariamente, a lo requerido.**”⁵ (Negrilla fuera del texto original)

En ese orden, de las pruebas allegadas al plenario se advierte que el 17 de junio de 2022, la señora MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA elevó una petición ante la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, a través del correo electrónico contactenos@circulemosdigital.com.co, como lo reconociera la entidad concesión de la secretaria accionada; respecto a lo cual no recibió respuesta dentro del término dispuesto por la ley, al tratarse de peticiones reguladas en el inciso 1º del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, pues de acuerdo con lo manifestado por la entidad en concesión de la secretaria demanda, respondieron el derecho de petición y notificaron el requerimiento el 19 de diciembre del año en curso, como lo acredita durante el trámite tutelar, y como en efecto, lo corrobora la accionante al Despacho⁶, cesando así la efectiva vulneración al derecho fundamental de petición de la señora MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA.

En relación con esto, ha indicado la Corte Constitucional que el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto tiene ocurrencia cuando, por un hecho sobreviniente a la petición de amparo, se satisface o desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante⁷. En consecuencia, la decisión que puede adoptar el juez respecto del caso específico resultaría, a todas luces, inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional (“Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración ...”)⁸.

En este supuesto, ha establecido la jurisprudencia constitucional, que no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “*si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. (“Sentencia de Tutela N° 546/19 de Corte Constitucional, 15 ...”) Esto es, que se demuestre el hecho superado*”⁹.

De allí que, al acreditarse como cumplido el fin perseguido con la acción de tutela,

⁴ Sentencia C-007 de 2017 “i) La pronta resolución. En virtud de la cual las autoridades tienen el deber de otorgar una respuesta en el menor plazo posible, sin que se exceda del máximo legal establecido, esto es, por regla general, 15 días hábiles; ii) La respuesta de fondo. Hace referencia al deber de las autoridades de resolver la petición de forma clara, precisa, congruente y consecuencial; y iii) La notificación de la decisión. Esta atiende al deber de poner al peticionario en conocimiento de la decisión adoptada, pues de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza exigible del derecho.

En este sentido, se presenta la vulneración de este derecho fundamental cuando se evidencie que no se ha otorgado respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o en aquellos casos en los que, no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o adecuada de acuerdo con la solicitud; sin que esto último signifique que la respuesta implique acceder, necesariamente, a lo requerido.”

⁵ Ibidem

⁶ Archivo No. 013 Constancia de comunicación con la accionante del 22 de diciembre de 2022.

⁷ Sentencia T-085 de 2018

⁸ Sentencia T-678 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[S]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

⁹ Sentencia T-685 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Subrayado por fuera del texto original.



es claro que, en este asunto, se configura la figura del hecho superado. Así las cosas, el Despacho procederá a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente, en consideración a lo expuesto, se conmina a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para que en lo sucesivo profiera respuesta a los derechos de petición elevados ante su dependencia en los términos dispuestos por la Ley, notificando los requerimientos dentro del mismo termino, y así evitar la vulneración de derechos fundamentales; advirtiendo que el Decreto 491 de 2020, en sus artículos 5 y 6, fue derogado por la Ley 2207 de 2022, la cual rige desde el 18 de mayo de 2022.

En mérito de lo expuesto, **el JUZGADO 23 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de la acción de tutela promovida por **MARTHA ISOLINA PADILLA ARIZA**, por los motivos expuestos en las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE a los interesados que contra la presente decisión procede la IMPUGNACIÓN ante el inmediato superior dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la misma, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, conforme lo preceptúa el inciso primero (1º) del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En firme la presente decisión, se **REMITIRÁ** el cuaderno original de Tutela a la Corte Constitucional, para su EVENTUAL REVISIÓN.

CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del fallo a las partes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y Cúmplase.


LUZ ANGELA CORREDOR COLLAZOS
Juez